

AGENDA CIUDADANA

¿GANAR POR LA FUERZA LO QUE SE PERDIO POR LA POLITICA?

Lorenzo Meyer

Hipótesis.- En el último tramo de su sexenio, y frente a persistencia de la rebelión de las comunidades indígenas en Chiapas, el gobierno presidido por Ernesto Zedillo pareciera decidido a ganar por la fuerza lo que no ha podido ganar por la vía política. Evidentemente es en el campo de la fuerza donde el gobierno tiene la gran ventaja. En cambio, en el campo de la política —el de las ideas, la legitimidad, las propuestas y la negociación— el gobierno está a la defensiva, en desventaja.

El mexicano no es el primer gobierno que, impaciente o desesperado ante la rebeldía de grupos marginales, hoscos y tradicionales, decide usar su superioridad militar para reducirlos a la obediencia. En realidad, toda la historia del imperialismo moderno, por ejemplo, está punteada de decisiones similares: castigar duramente a las comunidades campesinas rebeldes kurdas, afganas o vietnamitas, para mostrarles de manera palmaria que el costo de su insumisión es tan alto, que persistir en la desobediencia resulta irracional. Históricamente, el camino de la fuerza —donde el fuerte gasta, relativamente más recursos económicos y el débil, humanos-- ha dado resultados ambiguos pero siempre ha provocado daños y sufrimientos enormes a las comunidades castigadas. En México, ese método lo usaron, lo mismo el virrey Calleja que los franceses en la guerra de intervención, Díaz en su lucha contra las rebeliones indígenas que Luis Echeverría en Guerrero. Hoy la historia va camino de repetirse tanto en Chiapas como en Guerrero.

Explicación.- El 10 de junio pasado tuvo lugar un violento choque entre la policía y el ejército por un lado y por el otro algunos miembros de las comunidades que

apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La violencia de ese día dejó, al menos, un saldo de ocho simpatizantes zapatistas y un policía estatal muertos. Hay varias explicaciones para entender lo sucedido en el municipio chiapaneco de El Bosque, llamado San Juan de la Libertad por sus habitantes en rebeldía. De ellas, la menos plausible, la que simplemente no cuadra con la realidad cotidiana de México, es justamente la que ofreció de inmediato el presidente.

Según el jefe del gobierno —a la sazón en Chiapas para poner en marcha un gran programa más de obra pública—, en El Bosque o San Juan de la Libertad, las autoridades actuaron porque estaban obligadas a hacer cumplir la ley (**Reforma**, 13 de junio). Ante el asesinato en ese municipio, por emboscada, de Roberto Pérez Ruiz, un campesino simpatizante del PRI, y lesiones a otros cinco compañeros suyos que viajaban en un camión de redilas la mañana del día nueve; el gobierno reaccionó con celeridad nunca vista y ese mismo día empezó a movilizar sus fuerzas y 23 horas después del crimen empezaron a entrar 1,500 soldados y policías en Los Plátanos, Chavajeval y Unión y Progreso, para hacer cumplir 15 órdenes de aprehensión recién giradas. El resultado de lo que siguió ya lo han informado los medios: horas de fuego, dos policías muertos y del otro lado, prisioneros, heridos, muertos y la destrucción de la comunidad. Lo que no se sabe es como se desarrolló efectivamente el espectacular operativo. En la versión oficial, los ocho caídos murieron en combate, pero para los lugareños que recibieron los cadáveres de sus compañeros tres días después, la mayoría de ellos fueron ejecutados, pues el ejército y la policía se los llevó heridos pero aún vivos. Se vuelve a repetir la historia del ejido Morelia en el 94, desde la incursión hasta la manera como la comunidad recibe a sus muertos, con odio, rabia e

impotencia. La narración de Herman Bellinhausen, testigo privilegiado en ambos casos --¿es privilegio ser testigo de eso?-- tiene el peso del profesionalismo que al gobierno le falta (**La Jornada**, 14 de junio).

La historia de la procuración de justicia en México, en particular la más reciente, impide aceptar como normal que para hacer prevalecer el “Estado de Derecho” en las zonas más apartadas y pobres del país, el sistema de justicia mexicano investigue y de órdenes de aprehensión inmediatamente después de que tiene lugar el ataque a un campesino --o para liberar a un guatemalteco detenido por los rebeldes o para facilitar el retorno de varios expulsados, como fue el caso en Agua Tinta o Taniperlas--, y mucho menos que, sin perder un instante, la policía salga en masa a cumplir esas órdenes acompañada por el ejército con vehículos blindados y apoyados tanto por helicópteros como por notarios. Esa explicación simplemente no cuadra con una realidad donde el grueso de los crímenes que se denuncian --sólo una parte del total, y quizá no la mayor -- nunca se investigan, muchos son cometidos por la propia policía, y donde hay de miles de órdenes de aprehensión sin cumplir. Por tanto, la explicación de la “eficacia” con que el aparato del Estado actuó en Chiapas el día diez tiene que buscarse en decisiones extraordinarias que no provienen de la autoridad judicial sino de la política. Y no de los responsables formales --el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, está ahí por decisión presidencial-- sino del gobierno federal.

Finalmente, la explicación presidencial sobre la defensa del Estado de Derecho mal se aviene con el resultado en Chavajeval: tras el tiroteo el pueblo huyó al monte y “muchas casas presentan muestras de saqueo y de la incursión ordenada para dismantelar el municipio *autónomo* que los zapatistas fundaron en 1995... El maíz --

grano básico de su alimentación— tirado, botellas vacías y documentos esparcidos por el suelo son apenas una muestra del abandono en que ha quedado el poblado” (**El País**, 13 de junio). “...más de 300 casas saqueadas y robadas, animales de corral muertos; el dinero y la mercancía de las tiendas cooperativas de los indígenas, desaparecido” (**La Jornada**, 14 de junio). Las descripciones de la acción en Chavajeval y Unión Progreso son propios no del imperio de la ley sino de expediciones punitivas de carácter colonial sobre comunidades rebeldes. Así parece entenderlo la Alta Comisaria de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la irlandesa Mary Robinson, quien el 12 de junio pidió al gobierno mexicano la disminución de la presencia militar en Chiapas para disminuir el clima de terror en que vive ahí la población indígena.

Limpiando el Campo de Tiro. ¿Qué busca realmente el gobierno con el desmantelamiento sistemático y violento de los llamados “municipios autónomos” chiapanecos —cuatro entre abril y junio— que son las organizaciones políticas que encuadran a las bases sociales del zapatismo?. Una respuesta puede ser el generar presión sobre las comunidades para que éstas obliguen a la dirigencia del EZLN a volver a la mesa de la negociación en condiciones que permitan desechar de una vez por todas los incómodos Acuerdos de San Andrés. Otra sería rendir o eliminar al EZLN no mediante la acción directa sino destruyendo sus bases sociales —el agua en que vive el pez-- para aislarlo y que sea la selva la que le de el golpe final.

Desde que formalmente concluyeron los combates entre el ejército federal y el EZLN, el 10 de enero de 1994, se han reportado más de 200 muertes por razones políticas en Chiapas, pero hasta la semana pasada no se había registrado ningún

choque directo entre el ejército y las bases del EZLN. El desigual combate en San Juan de la Libertad —el ejército usó el fuego de sus carros blindados y de bazuca pero las armas capturadas fueron escopetas y unos cuantos rifles calibre 22—, y los muertos provocados por el choque —o asesinados después, según la versión de los habitantes de Unión Progreso— hablan de un salto cualitativo en la naturaleza del conflicto. Hay otros indicadores que apuntan en la misma dirección: la política hacia los observadores y hacia las comisiones de intermediación.

Como resultado de la globalización ha surgido una sociedad civil también global. Al desaparecer las fronteras que separaban al socialismo del capitalismo, desapareció también el anticomunismo. En principio, a partir de 1989, la única vía abierta al desarrollo político es la democracia. Y en la democratización global, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de los países avanzados han expandido rápida y agresivamente su campo de acción en la periferia. Usando como ariete la exigencia del respeto de los derechos humanos, las ONGs extranjeras y locales, abrieron boquetes en la muralla de la soberanía de los gobiernos sospechosos de hacer a sus ciudadanos eso que la moral política global condena. Por ello, y por la acción de los medios de información y los esfuerzos del EZLN, a partir de 1994 Chiapas se convirtió en foco natural de la atención internacional.

A contrapelo de las tendencias dominantes, el gobierno mexicano —las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores— está tratando de tapar el boquete que la sociedad civil internacional abrió en su vieja muralla del nacionalismo revolucionario (¿la cortina de nopal?). El éxito de esa empresa ha sido relativo. No se ha podido volver a cerrar el país, pero la ruidosa expulsión de observadores

extranjeros ha hecho que los que quedan en Chiapas sean menos y estén a la defensiva. Luego las baterías oficiales se dirigieron contra la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y esa parte de la Iglesia Católica –siempre minoritaria– identificada con las demandas de las comunidades indígenas. Al calificar al obispo Samuel Ruiz, sin mencionarlo, de “teólogo de la violencia”, el presidente obligó a disolverse a una Conai ya bajo ataque desde 1996. La otra comisión, la de Concordia y Pacificación, formada por legisladores, incluidos los del PRI, ha sido víctima de sus tensiones y contradicciones internas y aún tiene que mostrar que puede volver a tomar la iniciativa.

La Incógnita.- Volviendo al principio: ¿puede el gobierno imponer por la fuerza su voluntad sobre los rebeldes de Chiapas? A la corta, sin duda, aunque a un precio alto para la vida política mexicana en el largo plazo. El interés nacional, que no es igual al del gobierno, requiere de una nueva institucionalización de la relación comunidades indígenas-autoridades locales y nacionales. Una institucionalidad moderna y legítima, donde no haya paramilitares ligados al partido del gobierno ni comunidades excluidas por ser independientes ni, menos, que sea resultado de una situación de vencedores y vencidos.

Hay que impedir que el gobierno siga por el camino de la fuerza. El instrumento ideal para redirigir las acciones gubernamentales en Chiapas debería ser el congreso y los partidos de oposición, pero, como ya ha ocurrido, las naturales diferencias entre el PAN y el PRD pueden volver a impedir una acción eficaz. Si llegara a ser ese el caso, debería volver a activarse a esa parte de la sociedad civil mexicana que desde 1994 ha sido un elemento activo en la ecuación para que su solución no sea la de la fuerza.

De acuerdo a una encuesta de opinión pública –levantada por Alduncin y Asociados en febrero— sólo el 15.6% de quienes respondieron consideró que la política de Ernesto Zedillo en el conflicto de Chiapas está bien o muy bien, el 33.8% la vio regular y el 50.9% de plano la calificó de mal o de muy mal (**Este País**, junio de 1998). Sin embargo, hay incógnita: ¿la fatiga de cuatro años y medio sobre el tema chiapaneco no habrá llegado al punto que hace imposible nuevas movilizaciones para impedir que el presidente, el grupo de Gobernación y la Secretaría de la Defensa y el gobierno local, lleven hasta sus últimas consecuencias la política actualmente en marcha en Chiapas? ¿Existe aún la voluntad ciudadana de traducir su inconformidad en acciones que detengan la “violencia legítima” desatada sobre la última manifestación de rebeldía de unas comunidades que nunca se han resignado a ocupar el lugar secundario que los conquistadores y sus descendientes les asignaron en el proyecto colonial primero y nacional después?. De la respuesta que se de a esta pregunta dependerá, en buena medida, el curso que siga de aquí al 2000 la acción del gobierno.